TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de
dos mil veintitrés (2023).

Ref: Exp. 25307-31-03-001-2021-00043-01.

Pasa a decidirse el recurso de apelación interpuesto por la entidad incidentada contra el auto de 11 de noviembre de 2022 proferido por el juzgado primero civil del circuito de Girardot, mediante el cual resolvió el incidente de regulación de honorarios formulado por los abogados Jesús Arnulfo Gutiérrez Varón y Alejandro Alberto Antúnez Flórez contra la demandante dentro del proceso ejecutivo promovido por Junical Medical S.A.S. contra la Eps Famisanar, Coosalud Eps, Medimás Eps S.A.S. y Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva Eps-, teniendo en cuenta los siguientes,

I.- Antecedentes

La demanda, presentada el 24 de marzo de 2021 por el abogado Jesús Arnulfo Gutiérrez Varón, solicitó librar mandamiento de pago a favor del demandante y en contra de las Eps demandadas por las sumas de \$167'227.864 (Famisanar), \$3.111'180.925 (Coosalud), \$31'598.040 (Medimás) y \$12'395.780 (Nueva Eps), cifras correspondientes al capital de las facturas emitidas por la prestación de servicios médicos que ha realizado la ejecutante, más los intereses de mora sobre aquellas a una tasa del 2.5%, desde que se hicieron exigibles y hasta que se verifique su pago; el mandamiento de pago se libró el 19 de julio de ese año, y fue aclarado en lo que hace a la naturaleza del asunto, por auto de 3 de agosto siguiente.

Habiéndose notificado las demandadas, quienes se opusieron formulando excepciones de mérito y recurriendo la orden de pago, el citado apoderado, mediante escrito radicado el 9 de noviembre de ese año, le sustituyó el poder al abogado Alejandro Alberto Antúnez Flórez, quien reformó la demanda, a fin de que se tengan como demandadas únicamente a Coosalud, Medimás y Nueva Eps, esto por las sumas de \$3.856'289.640 (Coosalud), \$35'453.780 (Medimás) y \$191'503.273 (Nueva Eps), reforma que fue admitida por auto de 15 de diciembre de 2021.

Mas, el 7 de marzo de 2022, presentó la demandante el poder que le otorgó al abogado Juan Sebastián Castillo González, a quien mediante proveído de 9 de marzo siguiente el a-quo le reconoció personería, aceptando de esa forma la “revocatoria tácita” del poder que originalmente le había sido conferido al abogado Gutiérrez Varón y la sustitución que éste hizo a Antúnez Flórez.

Ante ello, los citados profesionales solicitaron la regulación de sus honorarios, pidiendo tasarlos en el equivalente al 3% del valor pretendido en el mandamiento de pago que se decretó por cuenta de la reforma de la demanda, esto es, la suma de \$160'809.098, dado que el valor de las facturas cobradas y sus intereses ascendían a \$5.360'303.281,51, pues éste fue el porcentaje que de forma verbal se pactó como honorarios y al que tienen derecho porque su labor fue cuidadosa, responsable y eficaz.

Y dado en traslado el libelo incidental, la incidentada se opuso aduciendo que entre ella y el apoderado no existió un contrato de prestación de servicios profesionales, sino que se le otorgó poder en virtud de la relación laboral que existía entre la entidad y él, pues se desempeñaba como coordinador jurídico de la sociedad, al punto que por esa razón rechazó el borrador del contrato que éste presentó, por lo que no tenía la posibilidad de delegar esa función en un abogado ajeno a ésta y mucho menos pretender el reconocimiento de una suma como la que

reclama por esa labor, lo que demuestra la mala fe en su proceder.

Practicadas las pruebas decretadas, mediante el proveído apelado, el a-quo reconoció como honorarios de los incidentantes, la suma de \$82'641.079, de los que corresponde el 20% al abogado Gutiérrez Varón y el 80% restante al abogado sustituto.

Lo decidido fue apelado por la incidentada en recurso que le fue concedido en el efecto devolutivo y que, debidamente aparejado, se apresta el Tribunal a desatar.

II.- El auto apelado

Aborda el asunto haciendo ver que si bien no puede tenerse en cuenta ese borrador del contrato donde se pactaron unos honorarios del 5% del valor que se recuperara en el proceso, porque no aparece suscrito por los interesados y por ello los incidentantes no se remitieron a él, lo cierto es que no por esa circunstancia puede decirse que el poder que se le confirió al abogado Gutiérrez Varón para iniciar el proceso, hacía parte de sus obligaciones laborales como coordinador jurídico de la sociedad, pues amén de que en ese contrato laboral no se señaló obligación clara, expresa y específica de elaborar demandas y adelantar procesos judiciales, no es fácil entender que un contrato como el aportado, cuya vigencia era de 3 meses y por un salario de \$1'800.000, comprenda también los honorarios por ejercer la representación judicial de una empresa en un proceso en el que se reclama una suma superior a los cuatro mil millones de pesos, respaldada en más de cuatro mil facturas, desde que comporta una labor tan dispendiosa que para proveer sobre el mandamiento de pago se requirió de la colaboración del personal del juzgado por espacio de veinte días, y menos cuando fue la única demanda que presentó, como para entender que se trataba de una carga emanada del contrato de trabajo.

Además, la empresa tenía conocimiento de la sustitución del poder que aquél hizo y estaba habilitado para hacerlo porque en el poder que se le otorgó no se incluyó la prohibición de sustituir, por manera que no puede ahora la incidentada alegar que no debe reconocerse el trabajo del abogado sustituto, ya que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, menos cuando la gerente es administradora de empresas especializada, y existen unas conversaciones de Whatsapp entre el sustituto y aquélla, en el que rendía informes del estado del proceso, lo que demuestra que conocía que la gestión de éste se estaba haciendo por un tercero, lo cual no se desvirtúa por el testimonio contradictorio de Jenifer Carolina Mateus Castillo, la coordinadora de cartera de la sociedad, en la medida en que denotó un evidente interés por favorecer a la empresa y dado que tanto la representante legal como su nuevo apoderado, a través de señas, le estaban sugiriendo las respuestas.

Es más, llama la atención la actitud de Juan Sebastián Castillo González, vicepresidente y actual apoderado de la demandante, pues no solo dejó en claro que no existió razón para la revocatoria del poder, sino que, como accionista y miembro principal de la junta directiva, celebró el contrato de prestación de servicios profesionales con otra sociedad de la que es representante legal, vale decir, Proelio C&B S.A.S, por unos honorarios muy superiores, lo que denota que su único fin era beneficiarse del trabajo que venían realizando los apoderados, conducta que sí resulta censurable desde el punto de vista ético y profesional.

Así, como los profesionales venían ejerciendo una labor adecuada, ejecutando las actuaciones conforme al mandato otorgado y cumpliendo con la vigilancia permanente del proceso, obteniendo que se librara el mandamiento de pago inicial, se decretaran y practicaran las medidas cautelares solicitadas, al punto que la Eps Famisanar pagó su obligación, así como que se admitiera la reforma de la demanda y se lograra la vinculación efectiva

de las ejecutadas, deben reconocérseles honorarios en la suma de \$82'641.079, que corresponde al 2% de la suma pretendida por concepto de capital de los títulos aportados, cuya cuantía asciende a \$4.132'053.923, atendiendo lo dispuesto en el acuerdo PSAA16-10554 y el artículo 366 del código general del proceso, pues aun cuando no se ha dictado sentencia, se realizaron actuaciones concretas y de relevancia para el cobro de esa suma; de ese total, le corresponde al abogado Gutiérrez Varón un 20% y al abogado sustituto el 80% restante al abogado sustituto, dado que lo que quedó acreditado es que fue éste quien con su equipo de trabajo elaboró tanto la demanda, como la reforma.

III.- El recurso de apelación

Lo despliega sobre la idea de que la decisión es contradictoria, porque sostiene que no puede reconocérsele al abogado Gutiérrez Varón la presentación de la demanda y la solicitud de medidas cautelares y sin embargo le tasa unos honorarios que ascienden a más de \$16'000.000; en todo caso, fue éste quien elaboró la demanda en su puesto de trabajo con la información que recibía del área de cartera de la institución y si él o el abogado sustituto debieron valerse de un equipo ajeno, no pueden pretender el pago de esos costos; además, el código general del proceso eliminó la palabra 'sustituto' cuando lo autorizaba a iniciar el incidente de regulación de honorarios, por lo que esa legitimación recae solamente en aquel apoderado al que se le ha revocado el poder, de suerte que no podía tramitarse ese incidente conjunto, menos cuando, según la norma, en un ningún caso puede actuar simultáneamente más de un apoderado judicial, de suerte que el abogado Antúnez Flórez no tenía legitimación para promoverlo, porque la representación de la entidad nunca se le encomendó.

De otro lado, el proceso ejecutivo parte de la existencia de unos documentos que contienen una obligación clara, expresa y exigible, por lo que librar orden

de pago no puede calificarse como un ‘logro’ atribuible al abogado, ya que basta con presentar documentos que cumplan los requisitos legales para ese efecto; en todo caso, ni siquiera se trataba de una providencia ejecutoriada, desde que Coosalud y Medimás interpusieron recurso de reposición contra la orden de apremio, cuyo traslado se corrió con posterioridad a la revocatoria; sin contar con que el abogado fue negligente al notificar el mandamiento de pago inicial, pues sólo dos meses después de proferirse aquél hizo unos intentos por hacerlo que finalmente no se concretaron, ya que no aportó constancia de la notificación y por eso la notificación de las ejecutadas se surtió por conducta concluyente; aun cuando se decretaron las medidas cautelares solicitadas, éstas no se habían materializado, por lo que su utilidad es meramente teórica; aunque Famisanar fue excluida en la reforma de la demanda, no se puede colegir que el pago que hizo se debió al proceder de los profesionales, porque se trató de un pago voluntario y no de uno provocado, dado que las cautelares no se habían practicado, debido a que los oficios tramitados en las entidades financieras resultaron frustráneos en cuanto que o no tenían productos en algunas de ellas o aplicaba la medida de inembargabilidad de los recursos.

El poder fue revocado en una etapa temprana del proceso, en la que no se había definido ni siquiera la ejecutoria del auto que libró mandamiento de pago, no se pronunciaron frente a los recursos de reposición, ni frente a las excepciones de mérito y no asistieron a audiencias, por lo que no puede decirse que la labor fue importante; en todo caso, la duración del proceso por motivo de la demora del juzgado y, en general, de la administración de justicia, no puede tomarse como un criterio a favor de los incidentantes para tasar sus honorarios, sin contar con que la actuación fue negligente, desleal y temeraria, pues el apoderado inicial abandonó su puesto de trabajo con información de la empresa y la utilizó para exhibir el contrato suscrito entre Proelio C&B y Junical, violando su deber de confidencialidad, mostró su afán por desligar su actividad de las obligaciones que tenía en virtud del contrato de

trabajo que tenía con la sociedad, donde se obligaba a dedicar toda su capacidad para desempeñar las funciones propias de su cargo, por un salario que no puede considerarse irrisorio, porque para esa época ya ascendía a \$3'936.146, y ni siquiera entregó la clave del correo electrónico donde se manejaban las actuaciones jurídicas internas y externas de la Ips; además, no explicó los alcances de las facultades que se le conferían con el poder y tampoco la intención de sustituirlo a un tercero, sin su consentimiento, y aunque la gerente es administradora especializada, carece de conocimientos en derecho, por lo que confiaba en la gestión de su trabajador y no en que se iba a confabular utilizando una sustitución no conocida y no autorizada para cobrar honorarios, cuando la representación judicial nunca le fue encomendada a ese tercero, por lo que los honorarios fijados no solo resultan desproporcionados, sino que no atienden la relación laboral que existía y que en virtud de la subordinación, el patrono podía alterar las condiciones de trabajo y asignar la función de representación.

Por lo demás, las acusaciones que se hicieron frente a su actual apoderado son infundadas, porque para la revocatoria del poder no debe existir alguna razón fáctica o jurídica, y porque se trató de una decisión adoptada por la asamblea, que decidió encomendarle la representación judicial de la Ips y avaló el conflicto de intereses que existía por ser representante legal de Proelio, la sociedad a la que se le confió la representación para casos especiales, actividades publicitarias, jurídicas y editoriales, de modo que no puede decirse que su intención fue favorecerse de ello o que su proceder fue de mala fe.

Consideraciones

Lo cierto es que si “[e]l ordenamiento jurídico atribuye por excepción competencia al juez civil de conocimiento de un asunto para regular los honorarios por la gestión profesional de los abogados, en la hipótesis específica de la revocatoria del poder conferido al

apoderado principal o sustituto de una de las partes, cuestión asignada, en línea de principio, a los jueces laborales” (Cas. Civ. Auto de 31 de mayo de 2010, exp. 11001-3110-015-1994-04260-01), es clarísimo que, dado el “singular carácter de tal competencia”, ésta debe “ser ejercida dentro de la órbita exactamente trazada por el legislador”, pues ella solo se explica por la “necesidad de resguardar principios elementales como el de la economía procesal y el de la inmediación, amén de que es aplicación de un criterio práctico de innegable valía”, pero sólo en unas muy específicas circunstancias (Cas. Civ. Auto de 22 de mayo de 1995, exp. 4571).

O sea, el *“el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior”*, como lo establece el artículo 76 del código general del proceso y cuando opta por el trámite que al efecto *“disponía el artículo 69 del código de procedimiento civil en torno al finiquito del poder, que básicamente es similar a la regulación actual, la Sala ha expresado que la figura del incidente de regulación de honorarios está sometido a las siguientes directrices:*

“a) Presupone revocación del poder otorgado al apoderado principal o sustituto, ya expresa, esto es, en forma directa e inequívoca, ora por conducta concluyente con la designación de otro para el mismo asunto.

“b) Es competente el juez del proceso en curso, o aquél ante quien se adelante alguna actuación posterior a su terminación, siempre que se encuentre dentro de la órbita de su competencia, la haya asumido, conozca y esté conociendo de la misma.

“c) Está legitimado en la causa para promover la regulación, el apoderado principal o sustituto, cuyo mandato se revocó.

“d) Es menester proponer incidente mediante escrito motivado dentro del término perentorio e improrrogable de los treinta días hábiles siguientes a la notificación del auto que admite la revocación. Ésta, asimismo se produce con la designación de otro apoderado, en cuyo caso, el plazo corre con la notificación de la providencia que lo reconoce.

“e) El incidente es autónomo al proceso o actuación posterior, se tramita con independencia, no la afecta ni depende de ésta, y para su decisión se considera la gestión profesional realizada hasta el instante de la notificación de la providencia admitiendo la revocación del poder.

“f) La regulación de honorarios, en estrictez, atañe a la actuación profesional del apoderado a quien se revocó el poder, desde el inicio de su gestión hasta el instante de la notificación del auto admitiendo la revocación, y sólo concierne al proceso, asunto o trámite de que se trate, sin extenderse a otro u otros diferentes, es decir, ‘queda enmarcada por la actuación adelantada por el petente dentro de este proceso, y solo dentro de él, desde luego que cualquier consideración sobre gestiones desplegadas en otros litigios desbordarían la esfera de competencia que de manera puntual señala la norma’ (Auto de 22 de mayo de 1995, exp. 4571), y también las cuestiones relativas a la determinación del monto de las agencias en derecho, en cuyo caso, ‘es el trámite de objeción de costas el procedimiento a seguir, de acuerdo con lo previsto en el inciso 2° del numeral 3° del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil’ (Auto de 18 de mayo de 2007, exp. 11001-02-03-000-2003-00024-01).

“g) El quantum de la regulación, ‘no podrá exceder el valor de los honorarios pactados...’ (artículo 69, C. de P.C.), esto es, el fallador al regular su monto definitivo, no podrá superar el valor máximo acordado’ (CSJ AC, 31 may. 2010, Rad. 4269, reiterado el

2 de nov. 2012, Rad. 2010-00346-00)” (Cas. Civ. Auto de 24 de septiembre de 2019, exp. AC4063-2019).

Puestas las cosas de ese modo, lo primero que debe anticiparse es que no le asiste razón a la apelación al sostener que sólo el apoderado inicial es el habilitado para promover este género de incidentes cuyo objetivo es la regulación de los honorarios a que un profesional del derecho tiene derecho, que no el sustituto, pues si bien la redacción de la norma, en comparación con el texto anterior del artículo 69 del código de procedimiento civil varió un poco, es de verse que la intención del legislador nunca fue privar de esa posibilidad al abogado sustituto, pues, como se dejó constancia en esas memorias de las discusiones que se dieron sobre el código general del proceso, los ajustes de redacción que se le realizan a la disposición “*en los incisos primero y segundo y una corrección de concordancia de número en el penúltimo inciso*”, no tuvieron el propósito de “*alterar el sentido de la norma*” (gaceta del Congreso 261 de 23 de mayo de 2012), algo natural si es que al establecer de modo general que esa potestad recae en el “*apoderado a quien se le haya revocado el poder*”, se comprende no sólo que esto se predica respecto del apoderado principal, sino también del sustituto, por supuesto que si “*cuando un abogado sustituye no está constituyendo un apoderado judicial, sino delegando las funciones que a él se le encomendaron*” (López Blanco, Hernán Fabio; Código General del Proceso; Parte General; 2016; Dupré Editores; Bogotá; pág. 416) en el poder primitivo, lo que debe entenderse es que la revocación del poder por parte del poderdante implica también la de las sustituciones, porque el “*apoderado sustituto ejerce un mandato sujeto a condición*” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto de 19 de agosto de 2004; exp. 2002-0009-01); de ahí, pues, que tanto el uno como el otro, están autorizados por ley para pedir la regulación de sus honorarios en atención a las actuaciones que cada uno alcanzó a adelantar dentro del trámite, sin que ello pueda tenerse como una afrenta a la prohibición que al respecto trae el inciso 3º del artículo 75 del citado

ordenamiento, pues una cosa es que se prohíba que actúe simultáneamente más de un apoderado judicial representando a una sola persona y, otra, bien distinta, que siendo varios los apoderados a los que se les revocó el poder, no puedan pretender al mismo tiempo el reconocimiento de sus honorarios, a sabiendas de que se trata de “*relaciones sustanciales que, aun cuando conexas, son inconfundibles*”, ya que cada “*mandato, por así llamarlo (...) da lugar a un conjunto de derechos y obligaciones nuevo y diferente del primero*” (Cas. Civ. Auto de 28 de junio de 1995, exp. 4571).

Aunque la defensa de la incidentada gravita esencialmente en el hecho de que no pueden regularse los honorarios porque la presentación de la demanda que hizo el abogado Jesús Arnulfo Gutiérrez Varón sólo tenía como propósito darle cumplimiento al contrato de trabajo que suscribieron el 1º de diciembre de 2020, en el que se le encargó desempeñar el cargo de coordinador jurídico de la entidad y, por ende, no estaba habilitado tampoco para sustituir esa función, lo cierto es que dicha argumentación se opone a lo que en realidad puede constatarse de esa relación entre la empleadora y su dependiente.

Y no sólo porque las copias de esos correos electrónicos, conversaciones y audios de Whatsapp aportados al proceso, que, por cierto, no fueron controvertidos por la incidentada, dejan al descubierto que la promoción del proceso no hacía parte de las funciones que se le habían asignado al profesional que ejercía como coordinador jurídico de la entidad, pues de otro modo no habrían estado refiriéndose al contrato de prestación de servicios profesionales de abogado, ni tampoco se habrían entendido las directivas con el abogado sustituto, a sabiendas de que en el contrato de trabajo expresamente se le obligaba a “*realizar personalmente las labores que le correspondan en el desempeño de su labor con sujeción a la ley y los reglamentos*”, pues, sin desconocer que “*cualquier empleador tiene la atribución de modificar las condiciones de sus trabajadores en las vertientes de tiempo,*

modo, cantidad y lugar, lo cual constituye un ejercicio de su poder subordinante como expresión del ius variandi” (Sentencia T-825 de 2003), lo cierto es que de haber sido eso lo que tuvo ocurrencia en el evento, alguno de esos correos o conversaciones entre el profesional y la institución, mostraría que las cosas eran así, que pese a la ambivalencia que se ofrece de la situación, las actuaciones del abogado estaban dictadas por la relación laboral, no que se guardara un total mutismo frente a ello, sobre todo si esos implícitos, esa forma voluble de manjar el asunto, en vez de revelar el cumplimiento de labores como empleado, se erigen como un serio indicio de que la representación en el trámite del proceso era algo ajeno a esas obligaciones derivadas de la relación laboral, al punto que, como a propósito lo ha dicho en distintas oportunidades la jurisprudencia, “[p]or el hecho de que una persona acredite legalmente como apoderado suyo en determinado negocio judicial, a un abogado en ejercicio, y de que éste acepte ante el juez respectivo el poder conferido, se entiende perfeccionado un contrato de mandato: el interesado confía al abogado su representación dentro del negocio en cuestión, y el profesional toma su cargo a la defensa de los intereses de su cliente obligándose a ejecutar los actos adecuados a tal objeto. En la doctrina y la jurisprudencia se acepta que el abogado tiene en tales casos los derechos y obligaciones de un verdadero mandatario”, de ahí, pues, que el “mandato judicial ‘se rige especial y preferentemente por las disposiciones legales que el código de procedimiento civil establece en el capítulo II, bajo el epígrafe de ‘apoderados’, sobre su celebración y forma, capacidad, terminación y demás condiciones que lo caracterizan como un mandato específico, sin perjuicio de quedar sometido a la normación general del mandato’ (Casación, marzo 17 de 1945, LVIII, 675)” (Cas. Civ. Sent. de 6 de julio de 1955, G.J. 2155, pág. 646 - subraya la Sala), de modo que, ante esa evidencia, la labor probatoria que le esperaba a la incidentada para acreditar, ante la falta de indicación en el contrato de trabajo de que una de las funciones de Gutiérrez Varón, era asumir la representación judicial de la empresa en los diferentes procesos que

promoviera en favor de ésta, era de mucha más intensidad que la que en últimas emprendió, especialmente cuando también la jurisprudencia ha admitido que pueden coexistir “*dos tipos de contratación, una laboral subordinada y otra profesional independiente*” (Cas. Laboral, Sent. de 8 de mayo de 2019, exp. SL652-2019).

Y ni qué decir de ese otro argumento según el cual el apoderado inicial no podía sustituir el poder a otro profesional, pues al margen de que entre las facultades que le confirió la demandante para que la representara está la de sustituir, lo que implica que no obstante el carácter intuito personae del mandato, la institución como mandataria aceptó que otro profesional del derecho podía representarla en el proceso, es lo cierto que el artículo 75 del ordenamiento procesal vigente establece que la facultad de sustituir es implícita, de suerte que cualquier prohibición en ese sentido debe ser expresada por el poderdante; y si ello no ocurrió así, no puede pretender desligarse ahora del reconocimiento de esos honorarios que por cuenta de la gestión deben abonársele al apoderado inicial y al sustituto, pues así se diga que la gerente no tiene conocimientos en derecho para haber adoptado esa previsión, no puede dejarse de lado el principio del derecho ‘*ignorantia juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat*’, según el cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción de que, habiendo sido promulgada, han de conocerla todos, de suerte que ese aparente desconocimiento no podría servir jamás de excusa en su favor, como que es claro que “*si el mandante quiere evitar que el apoderado inicial sustituya el poder, no debe limitarse a guardar silencio sobre el punto, sino que expresamente debe prohibirle esa posibilidad, lo cual es importante debido a que por expresa disposición legal ‘la actuación del sustituto obliga al mandante’*, esto es, que el mandante no puede eludir el cumplimiento de determinada decisión judicial alegando que en el proceso actuó un abogado que él originalmente no había designado” (López Blanco, ob. Cit., pág. 417); menos en un caso como el de ahora, en el que se trajeron por los incidentantes pruebas de

que el apoderado sustituto tenía contacto directo con las directivas de la sociedad y hasta rendía informes de su gestión, por lo que ese supuesto desconocimiento acerca de la sustitución no es más que una afirmación huera de sustento.

Ahora, siendo las cosas así, lo propio es adentrarse en el análisis correspondiente al monto de los honorarios; aspecto en que, debe precisarse, no habiéndose acreditado ese pacto de honorarios que sugirieron en el libelo del incidente los incidentantes, es claro que para hacer esa tasación de la remuneración abogadil a que tienen derecho por su gestión, obvio, hasta el momento en que se les permitió ejercer el poder, debe el Tribunal remitirse a las actuaciones que desplegaron dentro del proceso, tales como “*el acto dispositivo de las partes, su contenido prestacional, alcance, ejecución, intensidad de la gestión, estado al instante de la notificación del auto que admitió la revocación del poder y demás aspectos relevantes*”; a la “*naturaleza, calidad y duración de la actuación realizada por el apoderado*”, según lo dispone el numeral 4° del precepto 365 del código general del proceso, criterios aplicables para “*determinar las ‘agencias en derecho’ [e] igualmente útiles por analogía legis a propósito de la regulación de los honorarios en situaciones como las examinadas*” (Cas. Civ. Auto de 31 de mayo de 2010 – exp. 1994-04260-01), y a lo establecido por el acuerdo PSAA16-1054 de 2016, que establece la tarifa de honorarios aplicable al caso.

Cierto, la apelación invoca otra serie de circunstancias que tocantes con la forma en que terminó el mandato, lo cual, según se desprende de los documentos aportados a la actuación, acaeció con posterioridad a la revocatoria del poder; mas, aquellas resultan indiferentes en la cuantificación de esos honorarios, al igual que lo son también esas otras incidencias en que reparó el juzgador a-quo tratando de establecer si la revocatoria pudo estar justificada, o no, o bien si la incidentada pudo haber obrado torticeramente al revocar el mandato, desde que, como lo ha

señalado la jurisprudencia, la “*posibilidad de revocar el poder en cualquier momento procesal*”, denota que “*el legislador está dando cumplimiento a su deber constitucional de garantizar a todas las personas vinculadas en un proceso la posibilidad de estar presentes en el mismo, sin perjuicio del ejercicio del derecho de postulación, de manera tal que su interés, como titular del derecho fundamental a la defensa, prevalezca sobre la intervención del letrado, desde el inicio hasta la terminación de la litis*”; de ahí que no pueda condicionarse “*el ejercicio del derecho a la revocatoria del acto de apoderamiento, de quien está siendo representado en juicio, a una previa y debida justificación, porque tal revocatoria no descalifica per se al profesional del derecho actuante, no resulta abusiva, ni quebranta su derecho a percibir los honorarios causados con su actuación, simplemente indica que el poderdante no será representado más por el abogado actuante, porque el titular del derecho a la participación en juicio así lo resolvió. Lo anterior, porque la revocatoria del poder pone fin a la representación en juicio, con pleno efecto respecto de los sujetos procesales y de los terceros intervinientes, pero no desconoce el contrato de gestión; el que, de existir, rige de manera preferente las relaciones entre poderdante y apoderado y al que éstos se deberán remitir para arreglar sus diferencias, entre las cuales aquellas generadas por razón de la revocatoria injustificada del poder, tienen especial importancia*”, lo que en términos prácticos está diciendo que la permisión del “*inciso primero del artículo 69*”, es para que “*dentro del mismo proceso, mediante el trámite incidental, el abogado afectado con la revocatoria del poder inste la determinación de sus honorarios*”, lo que “*no obsta, para que, si así lo prefiere, acuda a otra vía procesal, en la que no solo se regulen los emolumentos a que tiene derecho por la actuación realizada, sino que se evalúe el ejercicio del derecho del poderdante a la revocación, por parte del poderdante, con el objeto de que sea compelido a indemnizar los perjuicios que puede haber causado por haber procedido a una revocatoria abusiva, o*

sin consultar los derechos del afectado” (Sentencia C-1178 de 2001 - sublíneas ajenas al texto).

O sea, no es el incidente de regulación de honorarios un escenario para ponderar esas cuestiones, de donde asoma claramente que el juzgado no tenía para qué entrar en esos abundamientos en que ingresó, si es que su quehacer, por razón de estos contenidos, estaba en otro lugar, reiterase, en la gestión que exclusivamente dentro del proceso alcanzaron a cumplir los incidentantes antes de que se les revocara el poder.

Pues bien. Tiénese, cuanto al actuar del apoderado inicial, que éste comprendió la presentación de la demanda (24 de marzo de 2021), la subsanación de ésta, para cuyo efecto debió comparecer al juzgado porque por el peso del archivo de los títulos valores aportados no era posible adjuntarlos vía correo electrónico, la solicitud de corrección del auto que libró mandamiento de pago (19 de julio de 2021) por haberse indicado una clase de proceso diferente, los intentos por notificar a las ejecutadas que fueron efectivos, al punto que si bien con excepción de la Eps Famisanar, comparecieron al proceso a pedir el link de acceso, con lo que se les tuvo por notificadas por conducta concluyente, aquellas dejaron constancia en sus contestaciones de que se enteraron del proceso por el correo electrónico que se les remitió el 27 de septiembre de ese año, que fue en la data en que el apoderado remitió esos correos electrónicos certificados, la solicitud de medidas cautelares encaminada al embargo y retención de los dineros que las ejecutadas poseían en las diferentes entidades bancarias o financieras, la que fue decretada en proveído de 19 de julio de ese año, cuyos oficios remitió directamente el juzgado, al paso, apoderado sustituto se limitó a la presentación de la reforma de la demanda, que fue admitida el 15 de diciembre de esa anualidad, y la solicitud de reconocimiento de personería, que hizo el 12 de diciembre posterior.

Esto enseña que la gestión de los apoderados [que se extendió por espacio aproximado de ocho meses por el inicial y de cuatro meses por el sustituto, tiempo durante el cual, en acatamiento de ese deber de vigilancia que les concierne, debieron haber estado al tanto del proceso], fue normal y adecuada hasta que vino la revocatoria del mandato, interrupción que, cual se vio, impide juzgar de manera integral la gestión de éstos, pues el proceso no alcanzó la fase de enfrentamiento probatorio que proporcionaría mayores elementos de juicio acerca de la destreza y aplicación de los profesionales, al punto que ni siquiera alcanzaron a pronunciarse sobre los recursos de reposición interpuestos por algunas ejecutadas frente al mandamiento de pago.

A pesar de ello nótese cómo el juzgado concluyó que los honorarios que deben pagársele a los abogados corresponden a un 2% del valor de la suma cuyo cobro compulsivo se pretende, cifra que, dígase de una vez, cual lo protesta con razón a la apelación, luce desfasada respecto de esa gestión que alcanzaron a realizar hasta ese momento en que vino la revocatoria; y así es, pues amén de que ésta se ofrece bastante discreta, pues así la cantidad de títulos ejecutados haya implicado una labor de organización y proyección de algún modo compleja para la presentación de la demanda, esos escasos actos procesales que alcanzaron a realizar en esa etapa inicial de la ejecución, como que apenas estaba en sus albores, no se muestra demasiado intensa ni dificultosa, es decir, no amerita una remuneración como esa que tasó el juzgado, más todavía si no habiéndose dictado todavía sentencia ordenando seguir adelante con la ejecución, el límite máximo a aplicar para establecerlos sería del 3% de las sumas determinadas, sin contar con que cuando las pretensiones son de índole pecuniario, como en este caso, la *“fijación de las agencias en derecho se hará mediante una ponderación inversa entre los límites mínimo y máximo y los valores pedidos. Esto es, a mayor valor, menor porcentaje, a menor valor mayor porcentaje, pero en todo caso atendiendo a los criterios del artículo anterior”* (parágrafo del precepto 3º del citado acuerdo 16-10554).

Si en el sub-judice, entonces, la cuantía del proceso asciende a \$4.132'053.923, el juzgado debió moverse en el límite mínimo de la tarifa; y ese mínimo, teniendo en cuenta la duración útil de la gestión desplegada por los apoderados, debe determinarse en el equivalente al 0.4% del monto de las prestaciones cuyo cumplimiento compulsivo se persigue, esto es, \$16'528.215, dado que, como se advirtió, la actuación de los mentados profesionales estuvo circunscrita a esa primera fase del proceso, donde no existe todavía una intensa actividad profesional, por supuesto que si el fin último de un proceso de ejecución es la satisfacción de un derecho, ya definido en un título, el juzgador no puede ir de espaldas a ello; y de ese monto, le corresponden al apoderado inicial \$11'569.750 y \$4'958.465 al sustituto, como que si bien se determinó en el incidente que éste, con su equipo de trabajo, también confeccionó la demanda inicial, la regulación de los honorarios debe hacerse con miras únicamente en lo que se aprecia en el proceso, es decir, lo que "*conciérne*" a él y "*solo*" a lo que haya acontecido "*dentro de él*", de donde surge que si el proceso certifica que tanto la demanda, como las demás actuaciones a que se aludió fueron gestionadas desde el correo del apoderado inicial, es imposible desentenderse de ello para adoptar una provisión que desborde esos específicos contornos señalados con antelación, máxime que al juez del incidente no le corresponde determinar internamente cómo se distribuyeron éstos el trabajo, ni tampoco los acuerdos que frente al punto arribaron.

Lo anterior es suficiente para modificar el proveído apelado, por las razones a que se aludió; no habrá condena en costas, dada la prosperidad de la alzada.

IV.- Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, revoca el auto de fecha y procedencia preanotadas para, en su lugar, fijar en la suma de \$16'528.215 los honorarios que

la demandante habrá de pagar a los incidentantes, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de los que corresponden \$11'569.750 al abogado Jesús Arnulfo Gutiérrez Varón y \$4'958.465 al abogado Alejandro Alberto Antúnez Flórez.

Sin costas del recurso.

En firme, vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

**German Octavio Rodriguez Velasquez
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 004 Civil Familia**

Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1b0abeca95e42a6af39ae3709fe2f1d106354c80e26bceae72c305e9eab9b0dc**

Documento generado en 31/03/2023 11:14:14 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>